

## Crónica del mes

### Agosto-septiembre

Agosto fue un mes marcado por la cumbre presidencial de Tela, no sólo por sus consecuencias para el proceso de pacificación regional en su conjunto, sino también para la reapertura de posibilidades de diálogo en El Salvador.

La cumbre de mandatarios centroamericanos tuvo lugar en dicho puerto sobre el atlántico hondureño entre el 5 y 7 de agosto. Ni aún los más optimistas esperaban los acuerdos que salieron de la reunión. Tras un largo y penoso proceso de discusión regional, los presidentes finalmente se habrían percatado que sin el desmantelamiento de los contras no existían perspectivas reales de pacificación en el área, mucho menos de democratización, y habrían tomado disposiciones para desactivar la guerra contra Nicaragua. Según el plan acordado por los presidentes (ver documentación), las fuerzas antisandinistas deberán estar repatriadas en el territorio nicaragüense o reubicadas en terceros países antes del 8 de noviembre del presente año. En contrapartida, el gobierno nicaragüense se comprometió a retirar la demanda incoada contra Honduras ante la Corte Internacional de Justicia por el respaldo otorgado a los contras. Asimismo, en los días previos, el presidente Ortega se había comprometido ante la oposición a facilitar ciertas concesiones para propiciar el proceso interno de democratización. En su virtud, el gobierno nicaragüense asumió los compromisos siguientes: promulgar una ley am-

plia e incondicional de amnistía para los detenidos por colaborar con la contra, la cual entrará en vigor al cumplirse el plan de desmovilización; suspender el reclutamiento para el servicio militar durante un período de seis meses; introducir nuevas reformas a la ley de medios de comunicación social; y adelantar la entrega del poder para el día 25 de abril al presidente y vicepresidente electos.

El consenso de los presidentes no fue fácil, habida cuenta de las presiones del gobierno de Bush para posponer el desmantelamiento de los contras; y del planteamiento de simetría con la situación del FMLN que el presidente Cristiani intentó introducir a la cumbre. El gobierno de Bush prefería esperar a los resultados de las elecciones nicaragüenses, programadas para febrero de 1990, antes de desmovilizar a los contras; y presionó en tal sentido a los presidentes, tanto en los días previos como durante el desarrollo de la cumbre. Estados Unidos argüía que no existían "plenas garantías para la seguridad civil y política" de los miembros de la contra que aceptaran su reintegración a Nicaragua.

Los dinamismos del proceso, empero, apuntaban en otra dirección. El 27 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU había solicitado por unanimidad la desmovilización de los antisandinistas como parte integral del proceso de pacificación de Centroamérica. Los propios partidos de oposición de Nicaragua solicitaban el desmantelamiento de

los contras. Incluso, el gobierno hondureño había empezado a dar patentes muestras de hastío ante la permanencia de las hordas mercenarias en su territorio.

Un fruto secundario de la cumbre, aunque en modo alguno desdiable, atañía a las posibilidades de democratización de El Salvador por la vía del relanzamiento del proceso de diálogo entre el gobierno de Cristiani y el FMLN. En los días previos a la cumbre, Cristiani había asegurado que su intención era la de replantear el problema salvadoreño de tal manera que la propuesta de desmantelamiento de los contras fuese tratada simultáneamente con un proyecto de desmovilización del FMLN. Sin embargo, los resultados de la cumbre apuntaron en una dirección muy distinta a las pretensiones del gobierno salvadoreño.

Efectivamente, el problema salvadoreño fue incluido en la agenda de la reunión, pero no bajo la forma de la tesis de simetría entre el FMLN y la contra, que el gobierno salvadoreño manejaba. Los restantes mandatarios centroamericanos no asumieron esa óptica. El propio Azcona Hoyos reconoció, en declaraciones previas a la cumbre, que el FMLN y los contras "son dos casos completamente diferentes:" el problema de la contra es que "está en un santuario dentro de territorio hondureño y no combatiendo en Nicaragua, mientras que el FMLN combate en su país," indicó Azcona a la salida de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad de Honduras el 2 de agosto.

Es probable que los ánimos de los mandatarios reunidos en Tela hayan sido influidos en alguna medida por la misiva que, por encargo de la comandancia general del FMLN, el presidente Daniel Ortega entregó a sus homólogos. En dicha misiva, el FMLN reiteraba su "disposición de llevar a cabo un proceso de diálogo-negociación constructivo y directo con el gobierno de El Salvador;" y solicitaba a los demás gobiernos centroamericanos su cooperación "para que en su espíritu de buscar una paz verdadera en la región contribuyan a facilitar que el conjunto de fuerzas políticas y sociales de El Salvador logren encontrar una solución política y negociada al conflicto

que vive nuestra patria."

El resultado de todo ello fue que, lejos de representar la deslegitimación definitiva del FMLN, como el gobierno salvadoreño pretendía, los acuerdos de Tela redundaron en un espaldarazo a las iniciativas de diálogo-negociación impulsadas por el FMLN mismo así como por los partidos políticos de oposición y por el Comité Permanente del Debate Nacional por la Paz (CPDN). Compreensiblemente, el FMLN no vaciló en mostrar su satisfacción por los resultados de la cumbre "pues legitimó el proceso de diálogo-negociación (en El Salvador) y se le dio el 'tiro de gracia' a la contranicaragüense... No pudo la presión y el chantaje norteamericanos pasar sobre la realidad de desmovilizar a la contra... Cristiani y ARENA fracasaron en su intento de imponer la simetría."

Sobre ese nuevo horizonte abierto por la reunión de Tela, los dinamismos para la reanudación del diálogo en El Salvador experimentaron un nuevo impulso. El 9 de agosto, tras haberse reunido con el FMLN en México, y con la Iglesia católica, representantes del PDC, PCN y Convergencia Democrática (CD) se entrevistaron con el presidente Cristiani, a quien entregaron una misiva que, a su vez, el FMLN les había entregado en México. El 10 de agosto, ofrecieron una conferencia de prensa para informar sobre el encuentro tenido con el FMLN en México y, en general, sobre las gestiones de intermediación desplegadas entre las partes en conflicto. En el curso de la conferencia, el Lic. Hugo Carrillo, secretario general del PCN, afirmó que "por el momento no hay nada concreto, pero hemos comprobado que existe en el gobierno y en la guerrilla disposición al diálogo." Por su parte, el dirigente de la CD, Rubén Zamora, señaló que Cristiani estaba mostrando algunos signos de apertura, como el hecho de no haberle dado vida, hasta ese momento, a la comisión gubernamental de diálogo, adversada por la oposición política; y resaltó el compromiso de ambas partes en el sentido de promover "gestos de buena voluntad" para crear un clima propicio a la reanudación de las conversaciones. En representación del PDC, Atilio Vieyetz expresó que "luego de

reunimos con el presidente Cristiani, salimos convencidos de que existe voluntad por parte del gobierno para buscar una solución negociada y coincidimos en diferentes aspectos, como el de que la guerra es un problema global y que necesita una solución integral.”

Un día más tarde, en esa misma línea, el coordinador del CPDN, Reverendo Edgar Palacios, manifestó, tras calificar de positivas las impresiones que el Comité había recogido tras sus entrevistas con el gobierno de Cristiani y con el FMLN: “les hemos tomado la palabra porque sentimos que ambos le quieren servir al pueblo.” El 20 de agosto, Monseñor Rivera informó que había recibido la visita de los partidos de oposición, los cuales le entregaron una carta del FMLN y le comunicaron sus impresiones sobre las reuniones sostenidas con Cristiani y con la insurgencia. A partir de tales datos, el arzobispo colegía que “existe buena disposición para el diálogo que pueda conducir a la finalización de la guerra,” aun cuando, por otro lado, lamentó que “en materia de derechos humanos se está experimentando un visible deterioro.”

El 21 de agosto, tras inaugurar la IX Reunión de la Federación de Cámaras de la Construcción de Centroamérica, Panamá y México, el presidente Cristiani informó a la prensa que en el curso de la siguiente semana quedaría constituida formalmente la comisión gubernamental encargada de implementar la reanudación del proceso de diálogo con el FMLN. Según el nuevo esquema de conformación de la comisión, ésta quedaría integrada por representantes de los tres órganos del Estado.

Sin embargo, cuando la atmósfera de diálogo empezaba a desempañarse, surgieron nuevas tensiones a raíz de la toma pacífica de la catedral metropolitana por parte de nueve lisiados de guerra del FMLN, quienes demandaban del gobierno la evacuación al exterior de todos los combatientes guerrilleros lisiados en los diferentes frentes de guerra.

El arzobispo de San Salvador, Monseñor Arturo Rivera, volvió a recordar que el problema

de los lisiados “es uno de los puntos de humanización del conflicto que se pueden retomar,” al mismo tiempo que recordó que en mayo anterior, cuando se había planteado por última vez dicho problema, el Alto Mando de la Fuerza Armada “estaba favorable a conceder esa salida de los lisiados, por lo que creemos que el Lic. Cristiani no tendrá inconveniente en permitirla.”

Cristiani, sin embargo, respondió que la evacuación no debía verse en forma aislada, sino dentro de un contexto global de diálogo. La postura del presidente de la asamblea legislativa, Lic. Ricardo Alvarenga Valdivieso, osciló entre el cinismo y la oposición visceral a la salida de los lisiados, al igual que lo hiciera en mayo. En sus primeras declaraciones, Alvarenga manifestó que “nada impide que los lisiados del FMLN salgan del país por las vías normales... ellos pueden perfectamente sacar su pasaporte, como lo hacen todos los salvadoreños, y salir del país hacia el lugar que deseen y que nadie los va a molestar.” No obstante, en declaraciones posteriores, puntualizó que su condición de lisiados no los eximía de la responsabilidad de pertenecer a la “subversión,” al mismo tiempo que subrayó que sólo una amnistía condicional aprobada por la asamblea legislativa podría permitirles salir del país.

En el seno del ejército, la posición más dura sobre este caso, la cual fue formulada públicamente, fue la del Viceministro de Seguridad, coronel Inocente Orlando Montano, quien en declaraciones vertidas el 21 de agosto expresó que “para la Fuerza Armada es injusto que se manden becados al exterior a los guerrilleros lisiados del FMLN, cuando el ejército también tiene gente inválida como consecuencia de los ataques terroristas.” En tono más comedido, en cambio, el coronel Mauricio Vargas, comandante de la Tercera Brigada de Infantería, con sede en San Miguel, expresó que la evacuación de los lisiados del FMLN, al igual que la eventual incorporación de la Fuerza Armada a la comisión gubernamental de diálogo “son decisiones que le competen al Organismo Ejecutivo; podría ser que no nos guste o que sí nos guste, pero la situación es que quien ejerce el poder es quien realmente tiene la decisión.”

En este contexto de intensa polémica en torno a la situación de los lisiados, pasó virtualmente desapercibido el anuncio que el presidente del Consejo Central de Elecciones (CCE) y representante de ARENA ante este organismo, Dr. Jaime Romero Ventura, formuló el 30 de agosto, confirmando la cancelación de los partidos Acción Renovadora (PAR), Orientación Popular (POP), Popular Salvadoreño (PPS), Auténtico Institucional Salvadoreño (PAISA) y Liberación, los cuales en las pasadas elecciones presidenciales de marzo no alcanzaron el mínimo del 0.5 por ciento de los votos válidos exigidos por la legislación electoral para que un partido político siga vigente.

En cambio, la discusión y las protestas en torno a las medidas económicas del nuevo gobierno continuaron sobre el tapete político. En particular, el incremento de las tarifas del transporte colectivo, urbano y extraurbano, constituyó una primicia particularmente ilustrativa de los efectos que la política de liberalización de la economía preconizada por ARENA tendría sobre el nivel de ingreso real de los sectores mayoritarios del país.

Las protestas populares ante el aumento de los pasajes no se hicieron esperar. El dirigente de la UNTS, Humberto Centeno, comentó que "ese incremento es el cambio para mejorar que propagandizó Cristiani en su campaña electoral que se traduce en más miseria y hambre para la población y alegría para los oligarcas." Por su parte, Arturo Magaña, del directorio de la UNOC, declaró que las medidas "nos afectan a todos los trabajadores por igual. Yo considero que tenemos que unir esfuerzos y unidos vamos a combatir las arbitrariedades del gobierno de ARENA que, en lugar de buscar solución a los problemas, justificará un estallido social." La Confederación General del Trabajo (CGT) condenó "la práctica del gobierno y empresarios de adoptar acuerdos bajo la mesa y a espaldas del pueblo, ya que las medidas económicas de trascendencia deben consultarse con los sectores perjudicados." También los partidos de oposición Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC) y Unión Democrática Nacionalista (UDN) se pronunciaron enérgicamente contra las nuevas

tarifas.

Ante tal ola de protestas, el titular de economía, Ing. Arturo Zablah, intentó nuevamente justificar, esta vez durante una conferencia pronunciada el 11 de agosto en la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM), la política de liberalización de precios de bienes y servicios asumida por ARENA. Por enésima vez, Zablah arguyó que la eliminación de controles sobre los precios constituía una exigencia objetiva para que las fuerzas del mercado pudiesen asignar óptimamente los recursos de la economía. No obstante, por otro lado admitió que las fuerzas del mercado poseen algún grado de retardo en su accionar, lo cual conllevaba inevitablemente sacrificios que tendían a golpear con mayor fuerza a los sectores sociales más desprotegidos.

El 24 de agosto, como parte de los esfuerzos hechos para paliar el descontento popular y legitimar el presunto carácter social de las nuevas medidas económicas, el presidente Cristiani anunció la puesta en marcha de su "Programa social." Cristiani aseguró que su gobierno destinaría un total de 941 millones de colones para atender prioritariamente a las aproximadamente 300 mil familias salvadoreñas en situación de extrema pobreza, a través de seis programas específicos: (1) Programa de trabajo temporal, destinado a generar 20 mil empleos al mes en aquellas épocas en que hay menos trabajo; (2) Programa de vivienda popular, encaminado a construir 6 mil viviendas de tipo popular a un costo no mayor de 30 mil colones por unidad; (3) Programa de alimentación popular, destinado a llevar alimentación gratuita a los sectores materno-infantiles y escolares y a proporcionar alimentos a cambio de trabajo en las comunidades; (4) Programa de desarrollo comunal urbano, orientado a lograr la incorporación de 200 comunidades en extrema pobreza, ubicadas en 16 municipios, a su propio proceso de desarrollo; (5) Programa Oriente 89, destinado a los departamentos de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán, cada uno de los cuales recibirá 40 millones de colones que serán invertidos en obras de infraestructura y de de-

sarrollo comunitario; (6) Programa de importación de alimentos, a fin de constituir una reserva estratégica de alimentos a partir de la importación de un millón de quintales de maíz, 100 mil quintales de frijol y mil toneladas de leche en polvo.

A despecho de los discursos de Zablah y de los proyectos sociales de Cristiani, la conducta efectiva de los empresarios, sin embargo, no dudó en aprovechar la coyuntura de liberalización económica avalada por el gobierno para incrementar sus ganancias. El 12 de agosto, la Asociación de Avicultores de Salvador (AVES) anunció nuevos aumentos en los precios de los huevos y de la carne de pollo, justificados por el aumento del 25 por ciento de los costos de producción de la avicultura, ocasionados por el encarecimiento de los insumos al aumentar el precio del dolar en el mercado extrabancario.

Aun así, los empresarios no mostraron una adhesión incondicional al programa económico de ARENA. El 14 de agosto, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) publicó un comunicado exponiendo una serie de consideraciones sobre las nuevas medidas económicas. Los industriales reconocían que, en su conjunto, éstas proporcionaban un instrumental adecuado para lograr el tipo de desarrollo requerido por el país, pero al mismo tiempo externaban su preocupación y cautela ante el tratamiento específico que el gobierno programaba aplicarles dentro del proceso de "ajuste estructural." Más en concreto, la ASI sostenía que el sector industrial sería el más afectado con la nueva política económica si el gobierno no asumía inmediatamente la tarea de construir una serie de "precondiciones necesarias" para la aplicación del programa de ajuste estructural.

El trasfondo del comunicado lo constituía la inminente aprobación de nuevas medidas arancelarias para fomentar la apertura de la economía al exterior y mejorar la competitividad de las exportaciones no tradicionales. La ASI estimaba que la disminución de los aranceles de las importaciones y la supresión de las exenciones fiscales de sus actividades dejaría "desprotegidos" a los industriales salvadoreños, puesto que éstos no po-

drían adaptarse inmediatamente a las condiciones de competitividad de sus socios comerciales del exterior. Entre otras medidas prácticas encaminadas a enfrentar esta situación, la ASI demandaba la formación de una comisión de ajuste estructural con participación del sector industrial y el establecimiento de un programa de reconversión industrial que proporcionase a las empresas la asistencia técnica y financiera requerida para aumentar su eficiencia.

El mes de agosto fue escenario de una sensible extensión y profundización de la actividad bélica a nivel nacional. La zona oriental, teatro tradicional de guerra, fue una vez más campo de intensos combates. Apenas a comienzos del mes, el 3 de agosto, el FMLN atacó el puesto fronterizo de El Amatillo, dejando un soldado y 3 guerrilleros muertos, y 3 policías de aduana heridos. Durante el mes, la prensa informó de al menos 13 combates tan sólo en el departamento de Usulután, 3 de ellos en Mercedes Umaña. La actividad bélica en dicho departamento habría alcanzado tal intensidad que en la penúltima semana de agosto, la Sexta Brigada de Infantería alertó a la población vecina a sus instalaciones sobre un inminente ataque guerrillero contra dicha guarnición. En San Miguel, la prensa registró 7 combates en Ciudad Barrios, Carolina y San Jorge, quedando 7 soldados muertos y 9 heridos. El 14 de agosto hubo intensos combates en San Luis La Reina, con un saldo de 12 guerrilleros muertos según COPREFA.

El 18 de agosto, el comandante de la Tercera Brigada de Infantería, coronel Mauricio Vargas, denunció que el FMLN estaba desarrollando una considerable concentración de sus unidades en toda la zona oriental, como una maniobra distractiva para facilitar la introducción de armamento desde el exterior. Un día después, el presidente Cristiani inauguró el plan "Oriente 89" en San Francisco Gotera (Morazán), con un presupuesto inicial de 40 millones de colones, presuntamente diseñado para respaldar la estrategia contrainsurgente en la zona.

El 29 de agosto, el FMLN atacó las posiciones

militares de las poblaciones de Santa Elena, Jucuapa, Mercedes Umaña y Concepción Batres, en el departamento de Usulután, así como en Chinameca, en San Miguel. El mismo día, unidades rebeldes atacaron un puesto de la Guardia Nacional en Jucuapa (Usulután), dejando un saldo de 4 efectivos heridos. También en el departamento de San Miguel se registraron fuertes combates, según informaron las fuentes militares. En las proximidades de la Hacienda Lacayo murió un guerrillero y resultaron heridos 2 soldados y 4 guerrilleros el 30 de agosto.

En el departamento de La Libertad, columnas guerrilleras atacaron la comandancia de la defensa civil de San José Villanueva, dejando 3 patrulleros muertos y 1 herido, además de destruir el local de ANTEL y causar daños en la alcaldía el 22 de agosto. Asimismo, el FMLN hizo dos emboscadas contra vehículos militares en las cercanías de Colón. En la zona occidental, Santa Ana continuó consolidándose como un importante teatro de operaciones militares. A lo largo del mes, la prensa informó de al menos 10 enfrentamientos, con un saldo de 17 guerrilleros muertos y 6 heridos.

Por otra parte, en Chalatenango también hubo recios combates, 6 de ellos en Tejutla. En el mismo departamento, el FMLN incursionó Dulce Nombre de María y atacó las posiciones militares de San Antonio Los Ranchos, La Laguna, La Palma, San José Las Flores, San Ignacio y el puesto fronterizo de El Poy, dejando 10 guerrilleros y 5 soldados muertos así como 8 rebeldes y 13 soldados heridos. El 5 de agosto, fuentes militares locales interpretaron diversos hostigamientos rebeldes en la periferia de la cabecera departamental como preparación de un ataque contra el cuartel del Destacamento Militar Número 1. Hacia finales del mes, los días 28 y 29 de agosto, unidades guerrilleras y tropas gubernamentales combatieron durante trece horas en la población de San José Las Flores; fuentes castrenses reconocieron en sus filas 2 soldados muertos y otros 4 heridos. El 29 de agosto, el FMLN emboscó una patrulla del Destacamento Militar Número 1, en las cercanías de la misma localidad.

En lo relativo a la zona paracentral, la prensa informó de 7 enfrentamientos en San Vicente, Cuscatlán y Cabañas, los cuales dejaron 9 guerrilleros muertos y 3 heridos, así como 4 elementos del ejército lesionados. En La Paz, también hubo serios enfrentamientos en San Pedro Nonualco el 2 de agosto, los cuales duraron 9 horas; en el mismo departamento hubo otro enfrentamiento el día 29, con saldo de 1 guerrillero muerto y 2 heridos en cada uno de los bandos. El 22, unidades rebeldes atacaron la casa-cuartel de la defensa civil de El Rosario (Cuscatlán), con un saldo de 4 patrulleros muertos, según lo reconoció el COPREFA. Otra nota de prensa del COPREFA informó de enfrentamientos en las localidades de Osicala (Morazán), Tecoluca (San Vicente) y Tejutla (Chalatenango), que habrían dejado como saldo 5 rebeldes muertos y 6 heridos, mientras que en las filas del ejército se registraron 2 muertos y 5 heridos, según el parte castrense.

El 29 de agosto, un helicóptero de la Fuerza Aérea (FAS) ametralló la iglesia de Santa Elena (Usulután) en el curso de un enfrentamiento con el FMLN. Los disparos acribillaron el techo del templo y estuvieron a punto de segar la vida del párroco. Sin embargo, el COPREFA presentó la noticia como si éste hubiese sido atacado deliberadamente por el FMLN. A la denuncia del hecho, formulada por el obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, quien desmintió la versión castrense, respondió el coronel Ricardo Casanova Sandoval, comandante de la Sexta Brigada de Infantería, con sede en Usulután, desmintiendo que efectivos de su unidad o de la FAS hubiesen atacado la parroquia. Según el coronel Casanova, "lo que verdaderamente ocurrió es que francotiradores guerrilleros apostados en el campanario de dicha parroquia hicieron disparos contra tropas de la Sexta Brigada y patrulleros de la defensa civil."

También la zona central fue escenario, a lo largo del mes, de una actividad bélica sumamente intensa, sobre todo en el departamento de San Salvador. En rigor, el arranque de esta actividad dio comienzo en el último día de julio, cuando el

FMLN inició la maniobra "Todos contra el gobierno fascista de ARENA" con un ataque a la defensa civil de San Ramón, a plena luz del día. Según informó la emisora Farabundo Martí, simultáneamente al ataque a San Ramón, el FMLN habría atacado también puestos militares en Ayutuxtepeque, Plan del Pito, Montebello y Mejicanos, todos al norponiente de la capital. Dos días antes, comandos rebeldes habían atacado la defensa civil de Soyapango, al oriente de San Salvador. Más tarde, el 10 de agosto, el FMLN atacó la defensa civil de Mejicanos; durante el ataque resultó herido el comandante de la guarnición. El día 14, otras unidades guerrilleras atacaron la Academia de Seguridad Pública, ubicada en Santa Tecla, con un saldo de 5 cadetes y 2 policías nacionales heridos.

Sobre la carretera Troncal del Norte, en las inmediaciones de Tonacatepeque y del Cerro de Guazapa, el FMLN realizó al menos 2 emboscadas contra vehículos militares, dejando 4 muertos y 5 heridos; asimismo atacó los puestos militares en Nejapa y Aguilares. La presencia guerrillera en la zona habría provocado un intenso bombardeo sobre el Cerro de Guazapa el 29 de agosto, el cual la Fuerza Armada justificó en aras de "limpiar de minas la zona." Ese mismo día, el comandante de la Primera Brigada de Infantería, coronel Francisco Elena Fuentes, confirmó que la actividad guerrillera en la zona metropolitana de San Salvador había experimentado un notable crecimiento en el último trimestre; mientras que los alcaldes de dicha área solicitaron a la Fuerza Armada que aumentase su vigilancia para contrarrestar las acciones del FMLN.

Durante el mes de agosto, el FMLN destruyó por lo menos 45 buses; así como un camión nacional y otro repartidor de bebidas y 3 cajas telefónicas. Asimismo, dicho saldo incluyó el atentado contra una casa distribuidora de repuestos y daños a la red de distribución de energía eléctrica, lo cual a la altura del 30 de agosto habían provocado un déficit del 70 por ciento en la capital.

Particular relevancia revistió el sabotaje contra el transporte público, luego de que el FMLN

anunciara que sus combatientes atacarían todas las unidades de transporte que aplicaran el alza de las tarifas acordada por el gobierno y los transportistas desde comienzos del mes. A tal punto llegó la destrucción de buses que el incipiente Comité Nacional del Transporte, constituido con ocasión de dicha crisis, visitó al arzobispo de San Salvador, Monseñor Rivera Damas, para solicitarle que intercediera ante el FMLN para suspender su campaña de sabotaje.

En este contexto, el día 25, presuntos comandos urbanos asesinaron a sangre fría a José Antonio Abarca, después de cerciorarse de que él era el propietario de un autobús de la ruta 28 que se disponían a destruir. No obstante, tres días después, a través de un comunicado difundido por Radio Venceremos, el FMLN negó que sus unidades hubiesen cometido dicho asesinato, al mismo tiempo aseguró que éste "es parte de la guerra sucia que están llevando a cabo el gobierno y la Fuerza Armada." Según el comunicado, "la oposición del FMLN al alza inmoderada en el valor del pasaje de autobuses se limita a la quema de las unidades, el decomiso de tarjetas de circulación y el ponchamiento de llantas, pero jamás a matar a los empresarios de autobuses." Por su parte, voceros del Comité Nacional del Transporte informaron el 30 que las pérdidas por la destrucción de autobuses por parte del FMLN, a lo largo de dicho mes, ascendían ya a 5.2 millones de colones.

Junto al intenso sabotaje al transporte, otra de las características cualitativamente más relevantes de la actividad guerrillera a lo largo del mes la constituyó la amenaza que para los medios aéreos de la Fuerza Armada empezaron a representar los fusiles AK-47, de mayor alcance, adquiridos por el FMLN. En efecto, en agosto, la guerrilla informó que había derribado un helicóptero *Hughes 500* y otro *UH-1H*, y que había dañado a otros dos de este mismo tipo. Tan sólo en la penúltima semana de agosto, el FMLN habría dañado 6 helicópteros de tipo no especificado, así como un avión *C-47* y una avioneta de modelo no determinado. En este contexto, el jefe del Estado

Mayor, coronel René Emilio Ponce, manifestó el 16 de agosto que sus fuentes de inteligencia habían detectado que el FMLN disponía ya de armamento antiaéreo semejante a los misiles SAM-7, aun cuando afirmó que todavía no había hecho uso de ellos.

Junto a la violencia estrictamente militar, también la violencia represiva, en sus diversas modalidades, prosiguió su ascenso de los meses anteriores. En declaraciones difundidas el 21 de agosto, el Viceministro de Seguridad Pública, coronel Inocente Orlando Montano, justificó tal incremento de la represión arguyendo que "el terrorismo urbano se ha incrementado últimamente como parte del Plan Saigón, trayendo a la gente armada al área urbana porque en el campo la guerrilla militarmente ha sido derrotada. Parte de eso son los ataques al transporte colectivo." Al mismo tiempo, aseguró que los cuerpos de seguridad han modernizado sus sistemas de interrogatorios y "no tenemos necesidad de torturar a nadie como lo ha estado diciendo la Licda. María Julia Hernández, vocera de Tutela Legal del Arzobispado, que se basa en cosas que le han contado y que no le constan." Todavía más, Montano puntualizó que "el Dr. Ungo y Zamora, así como otros políticos e izquierdistas, son responsables de reclamar por derechos humanos para la guerrilla, los extremistas, pero se olvidan de que igualmente tienen derechos la Fuerza Armada y todo el pueblo salvadoreño... La Fuerza Armada y los militares somos una necesidad para nuestro pueblo y por eso nos atacan, pero le vamos a poner paro a que cualquier hijo de vecino aparezca atacándonos y se quede impunemente tranquilo."

En medio del aluvión de denuncias de capturas y atropellos cometidos por la Fuerza Armada, dos incidentes, sin embargo, acapararon de manera especial la atención de la prensa. El primero ocurrió el 22 de agosto, cuando un efectivo del batallón Atlacatl asesinó a balazos al joven Miguel Ernesto Miranda Reina, estudiante de bachillerato del Instituto Ricaldone, en una colonia de San Salvador. Según testigos, un retén de dicho batallón, apostado a la altura de la Residencial Claudia, detuvo al

joven cuando pasaba por el lugar. Uno de los efectivos retrocedió un poco mientras lo interrogaba, precipitándose en un hoyo que estaba a sus espaldas. Enojado por la caída, el soldado empezó a disparar a los pies de Miranda Reina, quien optó por correr. Entonces, aquél le hizo varios disparos a la espalda.

La indignación que suscitó el abuso del soldado fue menor que la que provocaron algunas declaraciones castrenses al tergiversar los hechos e intentar justificar la agresión contra el estudiante. En declaraciones televisivas, un oficial del batallón Atlacatl comprometió al Instituto Ricaldone en actividades "subversivas." El coronel Francisco Elena Fuentes aseguró que el joven Mejía Miranda había dado un empujón al soldado antes que éste reaccionara disparándole. Las tergiversaciones alcanzaron tal magnitud que el 29 de agosto, el director del Ricaldone, P. Giuseppe Coró, se vio obligado a refutarlas categóricamente. Entre otros detalles, el P. Coró reveló que los soldados del retén le habían registrado el maletín al joven Miranda; en éste encontraron el libro de religión del Instituto, cuya portada presentaba un Cristo con barba, el cual tomaron por una efigie subversiva. Asimismo, el P. Coró denunció que, tras el asesinato del estudiante, el Instituto estaba siendo mantenido "bajo presión" por la Fuerza Armada; los alumnos eran acosados constantemente por los soldados, quienes también mantenían un piquete frente a la casa de la familia Miranda; y vecinos y amigos habían recibido llamadas amenazantes. Tras las declaraciones del P. Coró, el 31 de agosto, el jefe del Estado Mayor, coronel René Emilio Ponce, reconoció que "hubo un grave error" por parte del efectivo que disparó contra Miranda Reina; al mismo tiempo, subrayó que "la Fuerza Armada jamás ha dudado de la conducta del alumno fallecido y lamenta profundamente la tragedia." Asimismo, Ponce aseguró que el efectivo comprometido se encontraba detenido mientras se investigaban los hechos y se le deducían responsabilidades.

El segundo incidente ocurrió menos de una semana después del asesinato de Miranda Reina. El

28 de agosto, efectivos del Destacamento Militar Número 6 dieron muerte a dos estudiantes del Instituto Thomas Jefferson, de Sonsonate, y lesionaron de bala a seis más, sobre la carretera a Acajutla. De acuerdo a los informes, los estudiantes regresaban de este puerto cuando, a la altura de los kilómetros 68-70, en las inmediaciones del cantón La Campana, se le acabó la gasolina al vehículo en que se conducían, entonces decidieron pedir "aventón" a los vehículos que pasaban. Según versiones castrenses, los estudiantes habrían sido denunciados por un taxista como "guerrilleros que estaban interceptando el tráfico;" efectivos del citado Destacamento acudieron al lugar y los ametrallaron antes de cerciorarse de la denuncia. El 31 de agosto, sin embargo, el coronel Ponce admitió que también en este caso "hubo un error" en el procedimiento seguido por los efectivos, e informó que éstos se encontraban detenidos en vías de investigación a fin de deducirles responsabilidades.

En conjunto, agosto fue otro mes convulsionado por la guerra y la violencia política y constreñido por el deterioro de la economía. Con todo, sobre el horizonte abierto por la cumbre de Tela, los esfuerzos de las fuerzas políticas y sociales de oposición interna empezaban a perfilar nuevos dinamismos de concertación para enfrentar la crisis.

Estos dinamismos cristalizaron en *septiembre* con la reanudación del proceso de diálogo entre el gobierno salvadoreño y el FMLN. El 1 de septiembre, el FMLN hizo llegar al presidente Cristiani, por intermedio de Monseñor Rivera, una nueva propuesta de diálogo. En ella, proponía al gobierno reunirse en el exterior —en concreto, sugería como alternativas México o Costa Rica— entre el 10 y 14 de septiembre con "la representación del gobierno con las características y el nivel que éste quiera darle." El FMLN, por su parte, ofrecía enviar una delegación "con alto nivel y poder de decisión."

La respuesta de Cristiani fue afirmativa. El 7 de septiembre, el mandatario anunció a la prensa que las conversaciones se llevarían a cabo los días

12 y 13 de septiembre en México; y juramentó a la comisión gubernamental de diálogo, la cual quedó integrada por el Dr. Oscar Santamaría, ministro de justicia; el coronel Juan Antonio Martínez Varela, ministro de de la presidencia; el poeta David Escobar Galindo; el Dr. Abelardo Torres, asesor jurídico de la empresa privada; y el Dr. Héctor Hernán Contreras, rector de la Universidad Nueva San Salvador (UNSSA). Asimismo, Cristiani anunció que el ejecutivo presentaría a la asamblea legislativa un proyecto de decreto de amnistía especial para la evacuación de los lisiados del FMLN. A su vez, el FMLN reforzó la nueva dinámica con más muestras concretas de flexibilidad. El mismo día que Cristiani juramentó a la comisión gubernamental, la comandancia general guerrillera emitió un comunicado anunciando varios "gestos unilaterales que contribuyan a desescalar la guerra y crear un clima de negociación." En consecuencia, el FMLN anunció que a partir del 10 de septiembre suspendería sus operaciones de sabotaje a la energía eléctrica en todo el país, el sabotaje a las comunicaciones telefónicas en las ciudades, y la utilización de minas terrestres y trampas explosivas cazabobos. En contrapartida, demandó del gobierno y de la Fuerza Armada cinco compromisos: cese de la represión al movimiento popular, libre repatriación de refugiados y libre movilización de reproductores, irrestricta libertad de expresión, suspensión del reclutamiento forzoso y suspensión de minas y bombardeos contra la población civil por parte del ejército. El 10 de septiembre, en un nuevo comunicado, el FMLN añadió a los compromisos anteriores una tregua unilateral de 10 días, entre el 13 y 23 de septiembre.

Los gestos de buena voluntad contenidos en ambos comunicados alcanzaron en buena medida su propósito de favorecer el distensionamiento de la atmósfera política. El propio vicepresidente Merino reconoció, según declaraciones difundidas el 12 de septiembre, que "del texto del FMLN se desprende que sí hay una voluntad de ir mejorando las condiciones de parte de ellos; de cesar hostilidades a cambio, lógicamente, de una demostración del gobierno, el cual, desde luego, está en

la mejor disposición de llegar a acuerdos.”

Con todo, aún en vísperas del encuentro, subsistían algunos problemas operativos menores. El 10 de septiembre, el obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, hubo de viajar a México para ultimar los preparativos finales. En la mañana del 11, los delegados del FMLN le plantearon que, como contrapartida a la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), Monseñor Romeo Tovar Astorga, invitado por Cristiani a presenciar el encuentro en calidad de observador, ellos solicitaban la presencia de delegados de la ONU y de los partidos políticos de oposición. A final de cuentas, esta demanda del FMLN no se concretó, pero ello no fue óbice para iniciar el encuentro.

La delegación insurgente, un poco más numerosa que la del gobierno, estuvo presidida por los comandantes Joaquín Villalobos y Shafik Handal, acuerpados por las comandantes Ana Guadalupe Martínez y Mercedes del Carmen Letona, así como por los miembros de la comisión político-diplomática del FMLN, Mario López, Rubén Rojas, Miguel Sáenz Varela y Salvador Samayoa. Monseñor Rosa informó que existía la posibilidad de que en el segundo día de conversaciones se incorporaran a la delegación gubernamental el ministro de defensa, general Rafael Humberto Larios, y el jefe del estado mayor, coronel René Emilio Ponce, quienes se encontraban en la capital mexicana invitados por el gobierno de dicho país a los actos conmemorativos de la independencia de México. El 11 de septiembre, el propio Ponce había declarado que la Fuerza Armada estaba asesorando a la comisión en “asuntos que se refieren a la seguridad y soberanía nacional, así como en el campo militar en general.” Una semana antes, el vicepresidente Merino había informado que junto a la comisión que representaría al ejecutivo, habría otra comisión de apoyo, constituida como organismo consultor, en la cual participarían otros sectores, como la Fuerza Armada. No obstante, la presencia de ambos jefes castrenses en la comisión gubernamental no llegó a hacerse efectiva.

Ambas delegaciones manifestaron explícitamente la voluntad con que concurrían al encuentro. En vísperas de éste, el 12 de septiembre, el comandante Handal aseguró que “nosotros venimos en disposición no sólo de establecer procedimientos, sino de tratar asuntos sustanciales de una vez por todas.” Por su parte, el Dr. Escobar Galindo manifestó que los delegados gubernamentales “estamos en capacidad de entrar inmediatamente a las negociaciones; pero no queremos diálogos de 6 ó 7 horas nada más y cada tres meses, sino que queremos un proceso definido y establecido, que nos permita llegar a metas y objetivos claros, a un corto o mediano plazo.”

Las conversaciones se iniciaron el 13 en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, al sur de la capital mexicana. Ese día, el comandante Villalobos dio a conocer una “Propuesta para lograr la democratización, el cese de hostilidades y la paz justa y duradera en El Salvador.” La propuesta comprendía la discusión de tres bloques: concertación de un cese del fuego a más tardar el 15 de noviembre de 1989, pasos iniciales para la incorporación del FMLN a la vida política y negociación para el cese definitivo de las hostilidades y la integración total del FMLN a la vida política (a más tardar el 31 de enero de 1990).

Las discusiones se centraron más bien en cuestiones de procedimiento, según el deseo de la delegación gubernamental. Al FMLN le hubiera gustado discutir asuntos de fondo. En ese ámbito, el gobierno proponía integrar, a partir de ambas comisiones, un “organismo de trabajo” de carácter permanente, el cual sesionaría en forma ordinaria durante dos días cada dos meses según un calendario acordado, si bien admitía la realización de reuniones extraordinarias cuya fecha y duración sería acordada conjuntamente por ambas partes. El FMLN, en cambio, proponía que las reuniones se efectuaran por lo menos cada 30 días y que a ellas asistieran observadores de la ONU y OEA.

Por otra parte, el gobierno demandaba que una vez iniciado el proceso, ninguna de las partes se retirara de forma unilateral. El organismo mixto

desarrollaría su trabajo "en forma totalmente reservada," aunque podría acordarse la emisión de comunicados de prensa conjuntos. Asimismo, trabajaría "en forma directa sin mediadores ni observadores," aunque, "cuando lo estimen verdaderamente necesario, podrán invitar a obispos de la Iglesia católica, como testigos." Finalmente, la propuesta gubernamental sugería que "las sesiones se realizarán sucesivamente en México, Costa Rica, Venezuela y Guatemala."

No obstante la aparente buena disposición de ambas delegaciones, la primera ronda de conversaciones no resultó del todo fructífera. Al término de la primera sesión, el 13, el comandante Villalobos no pudo disimular cierta desazón por el bizantinismo con que se estaba ventilando la discusión sobre procedimientos, y deploró que el tiempo se estuviese yendo en discutir "si la mesa del diálogo va a ser redonda o cuadrada." Por lo demás, Villalobos manifestó que la propuesta que el FMLN había llevado al encuentro "es la más seria que hemos esbozado en los últimos años de guerra" y aseguró que "estamos dispuestos a pasar del diálogo a la negociación estratégica para poner fin a la guerra en un corto plazo." Algunas horas después, en la mañana día 14, añadió que el FMLN no exigía la integración de los dos ejércitos ni estaba sediento de venganza contra los militares; sólo demandaba la autodepuración de la Fuerza Armada. También aseguró que "no estamos pidiendo al gobierno que se salga de donde está, no le pedimos al gobierno que abandone la legitimidad que dicen haber obtenido en las elecciones."

Como resultado del clima subjetivo prevaliente, aún sin entrar en cuestiones de fondo la reunión arrojó frutos importantes a nivel operativo. El 15 de septiembre, al término del encuentro, ambas delegaciones suscribieron el llamado "Acuerdo de México" en función de dar al proceso de diálogo de "carácter permanente, máxima seriedad, garantías recíprocas y ritmos de trabajo que correspondan a la urgencia que tiene el logro de la paz." Según dicho acuerdo, la próxima reunión se llevaría a cabo en San José de Costa

Rica, el 16 y 17 de octubre, para discutir el cese de las hostilidades sobre la base de las propuestas de ambas partes.

Ambas delegaciones valoraron positivamente los frutos del encuentro. El Dr. Santamaría no vaciló en considerar que el acuerdo suscrito ayudaría "a cambiar bastante el patrón mental de muchas personas" que aún se oponen al diálogo en El Salvador. Por su parte, Joaquín Villalobos, en contraste con sus declaraciones del primer día, consideró que, finalmente, la reunión "fue positiva, un éxito," al mismo tiempo, resaltó el giro que se había operado en la actitud gubernamental frente al término de "negociación," la cual el gobierno veía previamente con sumo "recelo." Asimismo, subrayó que "no hay lugar para que la guerra continúe... el que quiera continuarla se ha quedado en el pasado." A su vez, Shafik Handal expresó el deseo de la comandancia general del FMLN de que "haya paz en nuestro país para navidad y año nuevo. El FMLN aspira a que 1990 sea el año de la finalización definitiva de la guerra, del cese de las hostilidades y la entrada de nuestra patria en una etapa nueva, cualitativamente superior de su historia."

En conjunto, también a nivel interno, los acuerdos de México fueron saludados con optimismo, incluyendo la propuesta que el FMLN llevó a la reunión. Julio Adolfo Rey Prendes (MAC), por ejemplo, opinó que la misma "tiene puntos factibles, que tienen que discutirse en la asamblea legislativa; aunque también hay puntos muy difíciles de aprobar." Por su parte, el jefe de la bancada legislativa demócrata cristiana, Aristides Alvarenga, expresó que "la propuesta del FMLN tiende a ser saludable y factible, pues pese a que contiene puntos difíciles, tiene un 90 por ciento que sí pueden resolverse." Hugo Carrillo, secretario general del PCN, opinó que "la propuesta del FMLN es la más política lanzada en los últimos años."

Una minoría de sectores, en cambio, subrayó las dificultades que erizaban el proceso. Así, el canciller, Dr. José Manuel Pacas Castro, manifestó que "algunos puntos propuestos por el FMLN en

México son contrarios a la Constitución." La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), en un comunicado difundido el 15, formuló "sus mejores votos porque la realización de nuevas prácticas en búsqueda de la paz, fructifiquen positivamente en beneficio del pueblo salvadoreño, que ha sido la única y principal víctima de la guerra," pero recordó al mismo tiempo que "cualquier logro que sirva para allanar el camino hacia la pacificación debe ceñirse al marco y los preceptos de nuestra Constitución Política, a fin de preservar el Estado de derecho."

La atención mayor de la Fuerza Armada, como era comprensible, se concentró en las demandas de reestructuración y reducción del gremio militar, contenidas en la propuesta del FMLN. Las declaraciones más desafortunadas en esta línea fueron las formuladas el 14 de septiembre por el viceministro de defensa, coronel Juan Orlando Zepeda, enfatizando que la Fuerza Armada "jamás" aceptaría una reducción de su actual estructura orgánica ni la disolución de los cuerpos de seguridad. Con todo, en contraste con el exabrupto de Zepeda, el ministro de defensa, general Rafael Humberto Larios, declaró el 22 de septiembre que la institución armada estaba en disposición de reducir sus dimensiones después de "analizar nuestra situación hacia el interior de la institución para definir cuántos recursos humanos, cuántos efectivos, cuánta tropa es necesaria para cumplir nuestra misión" una vez que se entre en un proceso efectivo de pacificación.

Pese a ello, paulatinamente, el optimismo con que ambas delegaciones salieron del encuentro empezó a ceder el paso a un clima de suspicacias recíprocas. El 19, el Presidente Cristiani manifestó a este respecto que el proceso de diálogo "no será un proceso fácil," debido a la existencia de "dificultades que separan a ambas posiciones; algunos puntos de la propuesta son violatorios de la Constitución Política y no podemos aceptar nada fuera del marco constitucional." A su vez, el FMLN alegó que el gobierno no estaba correspondiendo con gestos palpables a sus muestras de flexibilidad desplegadas para favorecer la reanuda-

ción del diálogo. Más aún, en una carta enviada el 25 de septiembre a la ONU, a la OEA y a las cancillerías de Europa y América, el FMLN acusó al gobierno de Cristiani de no querer negociar seriamente el fin de la guerra escudándose en la constitución.

A este clima de tensiones vino a sumarse, el 20 de septiembre, la decisión del senado norteamericano de aumentar a 90 millones de dólares la asistencia militar para El Salvador correspondiente al año fiscal 1990, decisión que el FMLN interpretó como un espaldarazo "al sector más duro del actual régimen salvadoreño" y "un rudo golpe a las posibilidades de encontrar una solución política negociada al conflicto."

Militarmente, a excepción del período cubierto por la tregua unilateral del FMLN, el mes se caracterizó por un renovado esfuerzo de ambas partes para concurrir a la mesa de conversaciones desde posiciones de fuerza.

El 1 de septiembre, el FMLN hostigó posiciones militares en Santa Elena y combatió con el ejército en los alrededores de las poblaciones de Jucuarán, San Agustín y Alegría; y al día siguiente en Berlín, todas ellas del departamento de Usulután; así como en las proximidades de San Jorge (San Miguel). Asimismo, pobladores de San José Las Flores (Chalatenango) denunciaron que aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea (FAS) bombardearon áreas habitadas por población civil en las inmediaciones de dicha localidad. El mismo día, en San Salvador, dentro de su línea de sabotaje, comandos del FMLN incendiaron cuatro vehículos propiedad del Ministerio de Trabajo; un día más tarde, atentaron contra una casa distribuidora de repuestos y dinamitaron otro autobús del servicio urbano, con lo cual ascendió a 46 el total de unidades destruidas desde el comienzo de la campaña guerrillera de sabotaje al transporte urbano a principios de agosto.

El 3, el FMLN hostigó las posiciones de la defensa civil de Apopa, al norte de San Salvador; el mismo día, la prensa informó de un combate en las cercanías de la quebrada "El Juidero" (Santa Ana). Un día más tarde, se combatió en Te-

nancingo (Cuscatlán) y San Ildefonso (San Vicente); en este último lugar, el ejército habría desmantelado un campamento guerrillero. Además, se informó que tropas del Regimiento de Caballería emboscaron una columna guerrillera en el cantón "El Progreso" (Nueva San Salvador, La Libertad), causando dos muertos y cuatro heridos al FMLN. En cambio, en San Juan Nonualco (La Paz), los guerrilleros emboscaron a una patrulla militar, causando la muerte a un soldado e hiriendo a otros tres.

En la zona oriental, el FMLN impulsó la operación militar regional denominada "Oriente tiene valor; todos contra ARENA." En estas circunstancias, el FMLN propinó a la Fuerza Armada, en la madrugada del 5, uno de los golpes más fuertes del mes. En ese día, las unidades guerrilleras atacaron a la tropa del Destacamento Militar N° 4 que daba seguridad al tanque de agua ubicado en el cerro Los Mata, que abastece a la localidad de Chilanga, jurisdicción de San Francisco Gotera (Morazán). Según fuentes castrenses, los efectivos guerrilleros atacaron la posición con fuego de fusilería, ametralladoras pesadas y lanzacohetes RPG-7. Durante los combates murieron un capitán, un teniente y 14 soldados que prestaban protección al tanque de agua. El mismo día, otras unidades guerrilleras atacaron puestos militares del batallón de infantes de marina, ubicados en la desembocadura del río Lempa, causándoles 5 bajas mortales. Por su parte, el COPREFA informó que el mismo día fue atacado el puesto de la Guardia Nacional en Sesori (San Miguel). Tras el ataque en Chilanga, el ejército montó un amplio operativo de rastreo y búsqueda en el norte de Morazán. El 6 hubo combates de encuentro en Osicala y Delicias de Concepción con un saldo de 3 guerrilleros muertos y 7 heridos.

Paralelamente a estas acciones, el FMLN atacó Tejutla (Chalatenango), donde, según fuentes castrenses, murieron 10 guerrilleros y resultaron heridos 15 más, así como 5 soldados, y Texistepeque (Santa Ana). El 6, el FMLN atacó posiciones fijas de vigilancia del ejército en Santa Ana y San Salvador, y emboscó a patrullas militares en distintos puntos del país. En el mismo contexto, atacó

la defensa civil del cantón El Carrizal y las posiciones del ejército en los cantones Iztaquilla, Laguneta y El Chiste, todos de la jurisdicción de Metapán (Santa Ana); mientras que en San Salvador atacó simultáneamente los puestos de vigilancia del Consejo Central de Elecciones (CCE), la subestación eléctrica CEL Miralvalle, y la casa del Ministro de Agricultura y Ganadería. El 7, se combatió en la zona de la loma La Tecolota (Santa Ana). Un día después, el FMLN atacó el puesto de vigilancia de la Policía de Hacienda de la Central Hidroeléctrica El Guajoyo. El ataque coincidió con el paso de la caravana de vehículos del vicepresidente Francisco Merino, quien regresaba de Esquipulas, donde había tenido lugar una reunión con sus homólogos de Guatemala y Honduras. Entre el 8 y 9 de septiembre, fuentes oficiales informaron que columnas guerrilleras atacaron cuatro veces las posiciones del Batallón Cobra de San Fernando (Chalatenango).

Después de estas acciones, la actividad bélica empezó a descender, pues el FMLN, tal como lo anunció, detuvo el sabotaje a la infraestructura eléctrica y telefónica desde el 10 de septiembre y cumplió la tregua unilateral prometida entre el 13 y 23 del mismo mes. Todavía el 9, zapadores del FMLN derribaron 4 torres de subtransmisión de 115 mil voltios en la zona de Mercedes Umaña y Jucuapa (Usulután) y en Chinameca (San Miguel), provocando cortes de energía en toda la zona oriental. No obstante, ese día, en un comunicado leído a través de Radio Venceremos, la comandancia general del FMLN instruyó a todas sus unidades a suspender tal tipo de sabotaje.

Originalmente, la idea de la tregua había sido sugerida por el Comité Permanente del Debate Nacional por la paz a principios de septiembre. Aparentemente, la sugerencia fue acogida con beneplácito por diversos sectores. Incluso el viceministro de Seguridad Pública, coronel Inocente Orlando Montano, habría señalado el 5 que "la propuesta del comité constituye una iniciativa muy positiva encaminada a la pacificación en nuestro país, a la cual deben sumarse todos los sectores nacionales, siempre que esa tregua sea respetada por el FMLN." Sin embargo, la inicia-

tiva de la tregua, una vez asumida por el FMLN, fue descartada sin contemplaciones por el jefe del estado mayor, coronel René Emilio Ponce, así como por otros jefes militares.

Todavía más, el ejército no sólo rechazó el ofrecimiento del FMLN, sino que aprovechó la tregua unilateral insurgente para desarrollar operativos militares de considerable amplitud en zonas de persistencia guerrillera. El 14 de septiembre, fuentes castrenses anunciaron la continuidad de los operativos militares permanentes en el norte de Morazán, en el área sur de Usulután, en Chalatenango y en el cerro de Guazapa. Por lo demás, ello no impidió al ejército acusar después al FMLN de haber violado la tregua.

De esta suerte, durante la vigencia de la tregua, se registraron doce combates de encuentro en siete departamentos del país. Según fuentes castrenses, el 13 se combatió en los alrededores de San José Las Flores (Chalatenango); y en la comprensión de Masahuat (Santa Ana) y San Juan Opico (La Libertad). El mismo día se combatió en las cercanías de Perquín (Morazán), donde los combates se prolongaron hasta el día siguiente. El 14 de septiembre, fuentes militares acusaron al FMLN de haber atacado las posiciones militares de la finca Pasadena, de Quezaltepeque (La Libertad); y de haber atacado un puesto de la Guardia Nacional de San Lorenzo (San Vicente). Posteriormente, la Fuerza Armada acusó al FMLN de haber hostigado en los alrededores de Metapán (Santa Ana) y de Perquín (Morazán) el 16. Por otra parte, el ejército dijo haber desmantelado tres campamentos guerrilleros en Chirilagua (San Miguel), Victoria (Cabañas) y Jiquilisco (Usulután).

El 19 de septiembre, cuando en principio la tregua del FMLN todavía estaba vigente, arribó al país una misión internacional preparatoria del grupo de observadores de la ONU para Centroamérica (ONUCA). La misión, presidida por el general brasileño Pericles Ferreira, se reunió con el canciller Manuel Pacas Castro y con el Ministro de Defensa, general Rafael Humberto Larios. El 20, la misión comenzó a visitar las diversas zonas conflictivas del país, para hacer un reconocimiento

“logístico y operacional” de la infraestructura que permitiría a “grupos móviles de observación” de la ONU verificar el cumplimiento de los acuerdos de Esquipulas II, ratificados en Tela, sobre la no utilización del territorio de un país para agredir a otro y la no asistencia a grupos armados irregulares. El 22, la misión partió para Nueva York, donde rendirá su informe al secretario general de la ONU sobre los resultados de su inspección.

A partir del 20 de septiembre, hubo más combates en San José Guayabal (Cuscatlán) así como en San José Las Flores, Dulce Nombre de María y Nueva Concepción (Chalatenango). Los días 21 y 22 hubo combates de encuentro en la jurisdicción de Nuevo Edén de San Juan (San Miguel), donde el ejército habría desmantelado un campamento guerrillero; así como en la jurisdicción de Chirilagua, del mismo departamento, y en los alrededores de Suchitoto (Cuscatlán) y Lislique (La Unión).

El 23 de septiembre concluyó formalmente la tregua unilateral del FMLN, la cual no fue efectiva del todo, debido al explícito rechazo de la Fuerza Armada para comprometerse con ella. Con todo, la disposición del FMLN para cumplir el compromiso asumido contribuyó a que disminuyera la intensidad de la guerra durante la tregua. Al concluir ésta, el conflicto bélico adquirió de nuevo su virulencia característica, pues el FMLN reinició sus hostilidades.

El 26 de septiembre, el FMLN inició una maniobra nacional denominada “Alto a la represión, todos por la conquista de la democracia y la paz” en nueve departamentos del país. Según informes de prensa, la maniobra habría consistido en 15 ataques a puestos militares. Según fuentes castrenses, los ataques de mayor importancia tuvieron lugar en las proximidades de Zacatecoluca (La Paz); el puerto de La Unión, donde el FMLN atacó las instalaciones del Destacamento Militar No. 4; en la cabecera departamental de Chalatenango, donde atacó el Destacamento Militar No. 1; en Texistepeque (Santa Ana); y en dos puntos del municipio de Suchitoto (Cuscatlán). Como resultado de los combates habrían muerto

20 soldados y 9 guerrilleros, mientras que otros 16 efectivos del ejército habrían resultado heridos. Hubo otros ataques en Chinameca (San Miguel) y en un puesto militar del centro de acopio de granos básicos, del departamento de Chalatenango. Según las mismas fuentes, los efectivos del ejército interceptaron una columna guerrillera de 150 hombres en la jurisdicción de Tejudá (Chalatenango) durante la noche del 25 de septiembre, causándole 12 bajas mortales.

En San Salvador, el 25, los comandos urbanos "Modesto Ramírez" ejecutaron la operación "Libertad a Juan Antonio Díaz," quien fue detenido por efectivos de la Policía de Hacienda. La operación consistió en un ataque, con fuego de fusilería y granadas, a un puesto de vigilancia de dicho cuerpo de seguridad en un edificio comercial de la zona norponiente de la capital. Como parte de esta operación, los comandos "ajusticiaron" al teniente de la Policía de Hacienda, José Cándido Alfaro. Tres días más tarde, dieron muerte al efectivo de la Policía Nacional, Concepción de Jesús Fajardo, quien prestaba vigilancia en una agencia bancaria.

Aunque uno de los acuerdos suscritos en México comprometía a las partes a no retirarse unilateralmente del proceso de diálogo, no faltaron quienes advirtieron que el diálogo podría suspenderse una vez más si el FMLN insistía en esta escalada bélica. Según declaraciones difundidas por la prensa el 29 de septiembre, el propio presidente de la conferencia episcopal (CEDES), Monseñor Tovar Astorga, manifestó que "el incremento de la violencia por parte del FMLN puede paralizar las conversaciones." También el alcalde de San Salvador y presidente de ARENA, Dr. Armando Calderón Sol, señaló que la espiral de violencia desatada por el FMLN tras la reunión de México "podría poner en tensión el proceso de diálogo, ya que la capacidad para dialogar no la mostrará el FMLN agudizando el conflicto, sino dando muestras de flexibilidad, porque el pueblo ya no quiere más violencia." Incluso el Dr. Guillermo Ungo, dirigente de la Convergencia Democrática, habría calificado de "equivocada" la

decisión del FMLN de querer dialogar desde una posición de fuerza a partir del incremento de sus acciones bélicas, "ya que ello puede interpretarse como falta de seriedad en sus planteamientos pacifistas."

Los otros aspectos del proceso nacional quedaron opacados por la marcha de la guerra y las vicisitudes del diálogo. Con todo, sobresalió el surgimiento de las primeras tensiones entre el programa económico de ARENA y el sector privado, a lo largo de dos ejes principales de confrontación.

El primer eje de confrontación se dio a propósito del llamado público que, ante los desmesurados incrementos en los precios de las medicinas y productos agroquímicos, formuló, el 6 de septiembre, el ministerio de economía a los importadores, fabricantes y distribuidores de medicamentos de uso humano y veterinario, así como de fertilizantes y pesticidas, instándolos a trasladar al consumidor final el subsidio que el gobierno les estaba dando a través del tipo de cambio fijo (5 colones por un dólar) a las importaciones comprendidas dentro de dichos rubros. En la admonición, el ministerio advertía con aplicar las "sanciones correspondientes" a los empresarios que no hicieran caso del llamado.

Los empresarios de la industria químico-farmacéutica negaron airados que estuvieran recibiendo subsidio alguno del gobierno a través del tipo de cambio, "ni siquiera para adquirir materias primas destinadas al suministro de medicinas para el Seguro Social y el Ministerio de Salud, menos aún para el resto del mercado." Los empresarios aprovecharon la ocasión para despotricar contra el "excesivo burocratismo" que rige las operaciones del Banco Central de Reserva en los trámites de importación.

El segundo eje de confrontación entre el gobierno y el sector privado empezó a gestarse en torno a las medidas de liberalización de las importaciones y la eliminación de los subsidios, las exenciones y demás medidas proteccionistas para la industria nacional, encaminadas a propiciar

la apertura externa de la economía. El director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Lic. Roberto Ortiz Avalos, declaró, el 13 de septiembre, que si bien la ASI estaba de acuerdo con la idea básica del programa de ajuste del gobierno, no lo estaba con la manera de llevarlo a cabo. Según Ortiz Avalos, la súbita liberalización económica de "un sector que ha estado acostumbrado al proteccionismo," como la industria salvadoreña, pone en peligro su existencia misma. Por lo tanto, la ASI pidió al gobierno establecer "precondiciones favorables" para disminuir los efectos del ajuste y dar tiempo a los industriales para acomodarse a la nueva situación. En una línea similar, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), en un comunicado difundido el 14 de septiembre, demandó del gobierno "condiciones elementales y básicas para generar productividad orientadas al bienestar general."

Por su parte, en el otro extremo de la polaridad capital-trabajo, el movimiento popular continuó asediado por la represión policial, al igual que en los meses anteriores. El 5 de septiembre, la sede de FENASTRAS fue objeto de un potente atentado dinamitero. El 8, la Policía de Hacienda capturó a José Antonio Serrano, directivo de la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Ganadería (ANTMAG), bajo la acusación de pertenecer a las FARN. El 14, el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (STISSS) denunció el allanamiento del local de ANTMAG por efectivos de la Policía de Hacienda, quienes destruyeron el mobiliario, los equipos, la maquinaria y la infraestructura. Por su parte, el Movimiento Comunal Salvadoreño (MCS) denunció que durante un cabildo abierto llevado a cabo el 10 de septiembre, al cual concurrieron unas 1,300 personas, fueron rodeados por un cerco militar tendido por efectivos de la Fuerza Aérea, quienes decomisaron su cédula de identidad a un directivo comunal.

El 12 de septiembre, FENASTRAS marchó por el centro de San Salvador para protestar por la captura de dos de sus miembros. Durante la

marcha fue incendiado un bus del servicio especial de la ruta 46, de lo cual los cuerpos de seguridad responsabilizaron a los manifestantes. FENASTRAS, en cambio, atribuyó la destrucción de la unidad a "elementos de civil armados" quienes se habrían infiltrado en la marcha para desacreditarla. Más tarde, el 18, FENASTRAS hizo una nueva marcha para demandar la libertad de los detenidos; ésta degeneró en acciones violentas durante las cuales quemaron dos unidades de transporte colectivo. Los agentes antimotines de la Policía Nacional disolvieron la marcha con gases lacrimógenos; un grupo de manifestantes se refugió en un templo evangélico, del cual fueron desalojados con los mismos gases. Durante los incidentes, la Policía capturó a 61 manifestantes, 32 de los cuales fueron entregados posteriormente al Comité Internacional de la Cruz Roja, mientras los restantes 29 "quedaron detenidos en vías de investigación." Los trabajadores liberados presentados a la prensa mostraban signos de golpes y aseguraron haber sido torturados. Sin ambages, el director de la Policía, coronel Guzmán Aguilar declaró que "los cuerpos de seguridad, especialmente la Policía Nacional, actuarán desde hoy sin ninguna contemplación contra los vándalos, proteste quien proteste." El 19, FENASTRAS volvió a marchar por el centro de la ciudad para protestar por las capturas y demandar la libertad de sus compañeros.

En una línea de movilización popular menos radical, pero más multitudinaria, el 15 de septiembre, el Comité Permanente del Debate Nacional por la Paz llevó a cabo una marcha para conmemorar la independencia, "por una solución pacífica negociada" y "por la soberanía nacional con justicia social." Según los organizadores, marcharon unas 100 mil personas. Informes más conservadores de la prensa internacional estimaron que participaron unas 60 mil personas.

El 23, Cristiani emprendió una breve gira por Inglaterra, Italia y Estados Unidos, para empezar a trabajar en el maquillaje internacional de su gestión. El 25, se reunió en Londres con representantes de diversas organizaciones británicas de

ayuda; tras lo cual dialogó, por deseo propio, con una delegación de Amnistía Internacional. El 26, se entrevistó con la primer ministro, Margaret Thatcher. Según declaración de la oficina de prensa de Thatcher, ésta habría discutido con Cristiani “sobre el continuo apoyo de Nicaragua y Cuba al FMLN, y sobre el programa de reforma económica de El Salvador, en particular la privatización” y le habría expresado el apoyo británico para “restaurar la paz y la estabilidad a

El Salvador.” En la segunda escala de su gira, en Roma, Cristiani fue recibido por el presidente italiano Francesco Cossiga. El 30, fue recibido por Juan Pablo II en una audiencia privada de media hora. El Vaticano no ofreció detalles de lo conversado. No obstante, en una entrevista el Radio Vaticano, Cristiani indicó que “en el pasado, quizá no siempre hubo pleno acuerdo entre la Iglesia y el gobierno. En la actualidad ya ha sido activada la obra de colaboración mutua.”

